

DECLARACION DEL CONCLAVE DE LA IZQUIERDA

E.L.
Ad

Profundamente conmovidos por la gravedad de la crisis que afecta a nuestra Patria, miembros de las Direcciones de los Partidos firmantes de esta Declaración, nos hemos reunido para afirmar en conjunto nuestras coincidencias y discutir nuestras diferencias, lo que permite realizar una contribución efectiva al logro de una salida política que garantice una auténtica democracia para Chile.

Al concluir nuestro trabajo, hemos acordado dar curso a un proceso de consultas en el ánimo de movilizar a las diversas fuerzas de la Izquierda que facilite la constitución del más amplio arco opositor y que conduzca a la construcción de un sistema político justo, participativo y estable, en el cual tengan plena vigencia los derechos humanos, el principio de la soberanía popular y la más completa realización de las aspiraciones de nuestro pueblo.

Hemos convenido en desarrollar iniciativas que, plasmadas en consensos nacionales, eliminen la exclusión y proscripción ideológica y política impuestas desde 1973.

A lo largo de nuestros debates se ha reiterado el emocionado reconocimiento a la memoria del Presidente Salvador Allende y a todos los caídos que en estos años han sido víctimas de la dictadura de Pinochet y que han pagado con sus vidas y su libertad la aspiración de vivir en una sociedad más justa, libre y soberana.

Para continuar examinando las posibilidades de acciones comunes de los Partidos de la Izquierda Chilena, sus Direcciones estudiarán una agenda de temas y decidirán los mecanismos y formas de aplicar las correspondientes conclusiones.

¡NO HABRA DEMOCRACIA SIN NOSOTROS!

Partido Socialista de Chile (S.Gral. C. Almeyda)
Izquierda Cristiana
Partido Socialista de Chile (S.Gral. M. Mandujano)
Partido Comunista de Chile
Partido Mapu Obrero Campesino de Chile
Partido Socialista de Chile (S.Gral. R. Núñez)
Mapu Obrero Campesino
Partido Socialista de Chile (Unitario)
Movimiento de Izquierda Revolucionaria
Partido Socialista Histórico
Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU)

Santiago, 13 de Diciembre de 1986.-

LA IZQUIERDA CHILENA AL PAIS:
NUESTRA PROPUESTA DE CONCERTACION DE LA OPOSICION
PARA LA LUCHA DEMOCRATICA

Los partidos que suscribimos el presente documento damos a conocer los consensos a los que hemos logrado llegar, que entregamos como un aporte a la construcción de mayores consensos del conjunto de los partidos de la Izquierda y a la necesidad de reconstituir la imprescindible concertación amplia de la Oposición y reactivación de la movilización social.

INTRODUCCION

La tarea de todos los chilenos amantes de la libertad y la democracia, desde el día mismo del Golpe de Estado que derrocó violentamente al Gobierno constitucional y democrático presidido por el compañero Salvador Allende, ha sido la de terminar con la dictadura usurpadora, en el más breve plazo posible.

La dictadura ha destruido al país y perjudica a la inmensa mayoría de los chilenos, que viven el drama de la cesantía, el hambre y la miseria; en que la superexplotación de los trabajadores llega a límites extremos, en los que no se respetan siquiera las ocho horas de trabajo y las mínimas garantías sociales, con remuneraciones reales que descienden día a día; en que las graves carencias de salud y vivienda agravan intolerablemente las precarias condiciones de vida en que se debaten los sectores más golpeados por las políticas de la dictadura; en que el alto endeudamiento externo e interno que afecta a empresarios, profesionales, pequeños propietarios y al país entero, pone en serio riesgo su futuro; en que los campesinos y los pequeños y medianos productores agrícolas se debaten en condiciones de extrema inseguridad. A todo esto se suma la persistencia de la represión, el terrorismo de Estado y la violación sistemática de los derechos humanos. En fin, los únicos favorecidos por la dictadura son las transnacionales, los monopolios y los grupos nacionales del gran capital financiero, que acrecientan su dominación sobre el país entero, agudizando la dependencia de Chile y el deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los chilenos.

La lucha decidida del pueblo chileno ha conseguido abrirse paso y obtener grandes logros democráticos, a pesar de la permanente represión. Desde 1983 el país ha vivido un nuevo período en su lucha por la libertad, la democracia y la justicia social. Se ha constituido un amplio movimiento antidictatorial de vasta base social y política, cuya aspiración es el fin del régimen militar. Ha quedado demostrada la creciente incapacidad de la alianza en el poder para seguir dirigiendo los destinos del país.

Durante el presente año la movilización unitaria de los más am-

plios sectores sociales y políticos del país ha logrado socavar profundamente los cimientos civiles y militares en que se asienta el régimen. En el seno de éste se ha profundizado la fractura entre quienes se pronuncian por continuar con la dictadura de Pinochet indefinidamente y los que quieren reemplazarlo en 1989 por un régimen civil que cautele, en lo sustantivo, los fundamentos del actual régimen. Por su parte, la Oposición ha visto profundizadas sus debilidades, originadas en la falta de entendimiento y en la persistencia de posiciones sectarias y excluyentes. Esto último, en particular, ha producido un repliegue momentáneo de la lucha social masiva.

Esta situación pone a la Izquierda frente a la enorme responsabilidad de recuperar el protagonismo popular en la lucha antidictatorial, generando al mismo tiempo las bases para reconstituir los importantes niveles de concertación opositora que permitieron llevar la movilización de masas al importante y exitoso Paro Nacional del 2 y 3 de Julio pasado.

Los destinos de la patria se ven cada día más oscurecidos por la obcecación de Pinochet y sus incondicionales -apoyados por la oligarquía financiera local e internacional- por perpetuarse en el poder, desoyendo y aplastando con una represión cada vez más dura al clamor masivo de los chilenos, que exigen el inmediato término de la dictadura y la restitución del ejercicio pleno de su soberanía. Al mismo tiempo, la crisis del país, profundizada día a día, se internacionaliza crecientemente con la cada vez más descarada intervención del imperialismo, que pretende imponernos una salida que preserve sus intereses estratégicos en Chile y en esta parte del mundo, en abierto detrimento de nuestra autodeterminación y del objetivo democrático al que aspira nuestro pueblo.

Cada día que pasa se dificulta más y más el camino para una salida democrática concertada, que incluya a todos los sectores representativos de las grandes mayorías del país y que implique un menor costo social para nuestro pueblo.

Esta situación nos preocupa profundamente. Se hace más necesario y urgente alcanzar un acuerdo político democrático amplio e inclusivo, que ofrezca una solución real, viable y oportuna a la gravísima situación en que nos encontramos. Algunos partidos de la Izquierda han buscado tal acuerdo suscribiendo o adhiriendo al Acuerdo Nacional o a las Bases de Sustentación del Futuro Régimen Democrático. También otros han hecho propuestas en

similar sentido desde sus propios referentes. No obstante, un consenso del conjunto de las fuerzas opositoras sigue siendo un desafío a lograr.

A lo largo de este siglo hemos contribuido decisivamente al sostenimiento y ampliación de la democracia y de la participación política de nuestro pueblo y hemos sido los conductores y sostenedores del último Gobierno democrático de la nación. En virtud de tal trayectoria, sentimos la responsabilidad ineludible de hacer hoy nuestro más decidido aporte en orden a concertar y configurar una mayoría nacional, social y política, que posibilite cuanto antes una salida a la crisis del país.

En la concreción de dicho aporte y no obstante nuestra actual pertenencia a distintos conglomerados políticos y nuestras legítimas diferencias, nos asiste la profunda convicción de que es imprescindible hacer un decidido esfuerzo por superar las diferencias entre las fuerzas de la Izquierda, dando inicio así a un diálogo y colaboración permanente entre nosotros, dirigido a ampliar nuestros campos de acuerdo en la perspectiva de nuestra creciente unidad. En tal forma podremos incidir con mayor gravitación en el esfuerzo por unir a todas las fuerzas sociales y políticas que en el país aspiran a una salida política rápida y lo menos costosa que sea posible.

En la búsqueda de tales avances, las fuerzas de Izquierda chilena signatarias de este documento hemos decidido explicitar nuestros consensos sobre puntos cruciales del acontecer nacional y proponer bases para facilitar una salida a la crisis y restablecer la urgente concertación democrática que el país exige y espera de la Oposición.

SOBRE LA ESTRATEGIA DE LUCHA DEMOCRATICA

Sin duda este es un punto central en torno al cual la Oposición no ha podido llegar a un acuerdo, imposibilitando una sólida y permanente concertación. La ausencia de acuerdos en torno a esta materia fundamental ha sido usada para justificar políticas de exclusión de significativas fuerzas de Oposición.

Reafirmamos nuestra convicción que la exclusión nunca será un camino de resolución de las discrepancias. Por el contrario, una política que en la práctica favorezca la división de la Oposición sólo debilita a las fuerzas democráticas en su conjunto, incluidas aquellas que

creen que de este modo se facilitarían sus posibilidades de negociación con los militares. Al final, la pretensión excluyente termina fortaleciendo al régimen y su determinación de perpetuarse.

Nos parece crucial, por tanto, realizar los mayores esfuerzos de claridad y generosidad en la búsqueda de un acuerdo acerca de la estrategia y las formas de ^{la}lucha democrática, convencidos que sin una Oposición mínimamente concertada, si no unida, será más difícil derrotar la pretensión de perpetuarse que anima al régimen militar y recuperar la democracia.

No deseamos la violencia y por ello buscamos la construcción de un régimen en el que las legítimas diferencias sean resueltas por medios políticos, pacíficos y democráticos. Ello es coherente con nuestra larga tradición de apoyo a la institucionalidad democrática que contribuimos decisivamente a generar y perfeccionar. La Izquierda rechaza el terrorismo y la militarización de la política, cuya responsabilidad fundamental recae en los instigadores y sostenedores de la dictadura militar.

La causa principal del angustiante clima de violencia que vive el país es el régimen dictatorial que, por ya largos trece años, oprime a nuestro pueblo ejerciendo cotidianamente el terrorismo y la violencia represiva contra todos los opositores, en especial contra los sectores populares. La Izquierda reconoce, igualmente, que el régimen ha llevado al país a niveles agudos de violencia social, política e institucional como consecuencia de la exasperante miseria y explotación y la despiadada represión contra los que más la sufren y se movilizan por terminar con ellas. Con todo, sostiene que el camino militar, ajeno de las masas populares, no es la vía para terminar con la dictadura. No obstante, la Izquierda jamás asimila o equipara la violencia de los que se rebelan contra la injusticia y la opresión intolerable, con la violencia de los que la imponen como forma de hacer prevalecer sus intereses minoritarios.

La experiencia de varios países que han vivido recientes procesos de transición de una dictadura a una democracia revela que son varios y diferentes, además de impredecibles, los cursos alternativos que finalmente se configuran para dicho tránsito. En el caso de Chile, sostenemos, una vez más, que el camino central y ordenador para terminar con la dictadura y alcanzar la democracia es el más decidido y permanente impulsó a la movilización democrática de masas, en que el pueblo

desarrolla su fuerza, unidad y protagonismo decisivo. Tal es el eje de un proceso ascendente en que las más diversas organizaciones sociales impulsan de manera sistemática y resuelta la lucha por sus reivindicaciones económicas, sociales, por los derechos humanos y por la democracia, hasta producir niveles tales de ingobernabilidad y de desarrollo de su fuerza que hagan imposible a las Fuerzas Armadas mantenerse en el poder. Así es posible estructurar una salida que permita no sólo recuperar la libertad y la democracia sino que hacerlo de conjunto con la realización de la justicia social. Esto exigirá el desmantelamiento de los pilares del régimen, como son la doctrina y carácter actual de las FF.AA., que han permitido su ilegítima utilización por el golpismo y la rapacidad de una minoría, el término de los niveles de concentración y centralización del capital, la erradicación de la dominación dictatorial y la recuperación irrestricta de la soberanía popular, el término de las políticas e instrumentos que atentan contra los derechos humanos y que impiden el esclarecimiento y justicia de los atropellos cometidos.

Este camino excluye la negociación con el actual Gobierno. En virtud del carácter de la dictadura chilena, de la reiterada y soberbia negativa de Pinochet a dar paso a la generación de un gobierno emanado del libre ejercicio de la soberanía popular y de su obcecada determinación de perpetuarse en el poder a cualquier costo, es ilusorio y errado pensar que pueda abrirse una salida que conduzca a la democracia mediante la negociación con el Gobierno. Tal negociación, de llegar a darse, sólo podría ser sobre la base de la rendición incondicional de la Oposición.

Sin embargo, reconocemos que este camino podría dar paso, en algún momento del desarrollo de la lucha de masas y de la correlación favorable de fuerzas antidictatoriales, a una negociación con las Fuerzas Armadas. Es posible, con la participación activa del pueblo a través de sus organizaciones sociales y políticas representativas, que pudiera llegar a concordarse con las Fuerzas Armadas, bajo determinadas condiciones, un proceso de real transición a la democracia, es decir, la devolución del pleno ejercicio de la soberanía del pueblo. Dentro de tales condiciones es fundamental el despliegue masivo y nacional de la desobediencia civil y de la ingobernabilidad, la disociación de las instituciones castrenses respecto a Pinochet y sus incondicionales y la puesta en práctica de garantías y condiciones mínimas como las propuestas en las medidas inmediatas del Acuerdo Nacional.

En esta perspectiva, afirmamos la validez política y moral de las acciones de movilización orientadas a producir la caída de la dictadura.

Ellas constituyen condición irremplazable, e ineludible para lograr ese fin. Son, además, expresión del derecho irrenunciable de nuestro pueblo a manifestar su descontento, defenderse de la represión y a exigir el respeto a sus derechos, desarrollando su combatividad sin doblegarse jamás ante la prepotencia represiva de quienes detentan el poder por usurpación.

El camino antes señalado debe ser materia de un acuerdo unitario, fundado en requisitos y exigencias objetivas, a partir de las cuales todos los participantes en tal entendimiento deben asumir obligaciones y compromisos concretos. Sobre todo, comprometerse a ceñir su conducta a los objetivos políticos, tareas y medios acordados, a lo menos por un plazo que de conjunto se concierte y al final del cual sólo los resultados de una evaluación colectiva podrán restaurar la plena autonomía de cada cual para continuar desarrollando su propia y parcial estrategia.

Este acuerdo entre las fuerzas opositoras debe buscar una solución al menos por el plazo que se acuerde, a los dos problemas que expresan la diferencia de estrategia existente, es decir, establecer lo más precisamente posible, ante una eventual negociación con las Fuerzas Armadas, los niveles de fuerza requeridos y los marcos políticos aceptable para ello, por un lado, y establecer con la debida explicitación los medios que legítimamente habrá que utilizar para impulsar la movilización de masas y las tareas coadyuvantes y complementarias que su exitoso desarrollo supone, por otro lado.

En la búsqueda de este acuerdo deben primar, por sobre cualesquiera otras legítimas consideraciones e intereses de las partes, el superior interés patriótico y de sensibilidad por los agudos sufrimientos de nuestro pueblo, así como la necesidad urgente de abrir paso a una salida viable y auténticamente democrática a la crisis del país. Asimismo, la mutua credibilidad que la sustentación del mismo presupone debe estar asentada en el más leal cumplimiento de los compromisos contraídos.

En la hora crítica para el destino de la Patria que vivimos, hacemos esta propuesta, que es expresión de nuestra decisión para contribuir a restituir las bases de concertación social y política que habíamos logrado desarrollar todas las fuerzas opositoras, juntas y al mismo tiempo, hasta el exitoso Paro Nacional del 2 y 3 de julio pasado.

SOBRE LA MOVILIZACION SOCIAL

El proceso de movilización de masas que propiciamos requiere: promover y fortalecer las organizaciones sociales a nivel local, comunal, regional y nacional; desarrollar la conciencia social y política de sus participantes y del pueblo en su conjunto; avanzar grados significativos de concertación entre las organizaciones sociales y entre las fuerzas políticas que luchan por la democracia; desarrollar un efectivo plan de movilización social en torno a las reivindicaciones económicas sociales y políticas más urgentes que incluya objetivos tácticos intermedios y los niveles y formas de acumulación de fuerzas requeridas, hasta el logro del objetivo final; establecer acuerdos efectivos que ayuden a las masas a protegerse de nuevas masacres y eviten que la fuerza represiva del régimen desarticule las actividades de movilización emprendidas por la mayoría de la población. Es vital que la movilización signifique, en suma ganar en organización popular, en expresiones activas del poder.

El proceso de movilización exige mantener una sólida vinculación de la lucha reivindicativa económica, social y por los derechos humanos que libran diariamente los más diversos sectores sociales del país con los objetivos democráticos propiamente políticos. En la actual situación, el conjunto de las fuerzas democráticas debemos impulsar la lucha contra el Estado de Sitio y la represión, en defensa de los derechos humanos, en particular contra la tortura y la pena de muerte, en defensa de nuestro patrimonio nacional y levantar con renovada fuerza el Pliego de los Trabajadores del Comando Nacional de Trabajadores, la demanda de Chile de la Asamblea de la Civilidad, las Medidas Inmediatas del Acuerdo Nacional y todas y cada una de las plataformas de lucha antidictatoriales.

La Izquierda compromete todos sus esfuerzos en el apoyo al proceso de democratización y de formación de una organización única de los trabajadores sindicalizados del país que propicia el Comando Nacional de Trabajadores. Igualmente, cree de la mayor importancia que todas las fuerzas opositoras renueven su decidido apoyo a la Asamblea de la Civilidad, el más importante logro unitario a la fecha, otorgándole un rol de especial relevancia en la estructuración y ejecución del plan de movilización social que se acuerde por el conjunto de las fuerzas sociales y políticas del país. Considera también trasendental el aporte de dicha Asamblea en la discusión, apoyo y promoción de los consensos políticos que vayan dando forma a una propuesta unitaria de salida a la crisis del país y la transición, como lo hizo en agosto pasado.

Entendemos que existe una relación indisoluble y mutuamente potenciadora entre los planes de movilización que se acuerden y la voluntad política que debe acompañar su realización, con el acuerdo político entre el conjunto de las fuerzas opositoras que logre desarrollar a partir de los consensos en torno a la estrategia de lucha democrática que aquí hemos propuesto.

En cuanto a la movilización social para los próximos meses, reiterando la importancia fundamental de impulsar con renovada energía la lucha reivindicativa y por las demandas políticas globales, manifestamos nuestro acuerdo con la propuesta de levantar la demanda y campaña por elecciones libres. Tal acuerdo es concordante con nuestra exigencia y adhesión irrestricta de ayer, hoy y siempre a la expresión y ejercicio pleno de la soberanía popular como principio fundamental de la democracia.

Reiteramos, no obstante, que mientras permanezca Pinochet en el poder y su Constitución, de 1980, no existe ninguna posibilidad de elecciones verdaderamente libres.

Hacemos nuestros los criterios planteados por la Conferencia Episcopal con ocasión del plebiscito fraudulento mediante el cual la dictadura impuso la aprobación de la Constitución de 1980, en que planteó condiciones básicas para las elecciones libres: garantía de plenas libertades, secreto y seguridad para emitir el voto, garantías plenas e iguales para acceder a los medios de comunicación y para controlar la corrección del proceso electoral en cada una de sus etapas. A ellas agregamos la exigencia de que tales elecciones sean realmente democráticas, careciendo de cualquier expresión de exclusiones o discriminaciones.

Afirmamos que para que la campaña por elecciones libres sea un aporte real a los esfuerzos de nuestro pueblo por terminar con la dictadura y conquistar la democracia, debe formar parte y estar indisolublemente ligada al conjunto de las luchas de los chilenos por sus reivindicaciones y derechos conculcados.

Proponemos, como un aspecto fundamental de dicha campaña, un esfuerzo conjunto por la democratización y el rescate de todas las organizaciones sociales y comunitarias de base, funcionales y territoriales -en especial Juntas de Vecinos y Centros de Madres- a fin de constituir organismos sociales democráticos, representativos y unitarios que vayan conformando un vasto movimiento territorial comunal, base futura de una democracia de amplia participación en donde la soberanía sea patrimonio real y activo del pueblo.

Debemos dejar claramente sentado, no obstante, respecto a esta campaña, que nos preocupa la tendencia observada en algunos sectores opositores a asimilar dicha demanda por elecciones libres a la imposición de un modelo de salida que no cuestiona la permanencia de Pinochet en el poder, aceptando implícitamente su meta de 1989 y hasta la posibilidad de que sea uno de los contendientes del eventual torneo electoral que se realizaría bajo su mando presidencial. Advertimos que ello es grave, por cuanto profundizaría peligrosamente la división en la Oposición, además de asegurar la renuncia o derrota del objetivo democrático mismo. Reiteramos nuestro propósito de elecciones libres en un Chile libre.

Por ello es que enfatizamos, también que la movilización por elecciones libres debe convertirse en una gran ocasión de unidad de nuestro pueblo, de lucha conjunta de sus organizaciones políticas y sociales, de aproximaciones entre las distintas corrientes políticas de modo de crear vínculos y solidaridades entre ellas que faciliten acuerdos para la profundización y sustentación de la democracia futura. Cualquier intento por transformar tal campaña en un instrumento de división de la Oposición constituirá una actitud irresponsable que sólo logrará provocar nuevas decepciones a los chilenos y un peligroso socavamiento de la credibilidad de los partidos que se involucren en tal intento.

SOBRE UNA PROPUESTA DE TRANSICION

En la actual etapa de desarrollo de la lucha democrática de las amplias mayorías nacionales parece de la mayor importancia intentar avanzar en torno a una propuesta unitaria para la transición. Nos parece crucial recoger los fundamentales puntos de consenso que en agosto pasado se fueron construyendo implícitamente a partir de las confluyentes propuestas del Movimiento Democrático Popular y la Alianza Democrática, así como de la Intransigencia Democrática, oportunamente sistematizados y apoyados por la Asamblea de la Civilidad.

Entre tales puntos:

- a) La salida de Pinochet;
- b) La instauración de un Gobierno provisional encabezado por una personalidad de amplio consenso entre las fuerzas democráticas, civiles y militares;
- c) La aplicación por ese gobierno de un plan de emergencia socioeconómico que busque satisfacer las urgentes demandas de los sectores más desfavorecidos, las exigencias mínimas de la Demanda de Chile y las medidas inmediatas del Acuerdo Nacional;

d) La realización a breve plazo de elecciones de Presidente de la República y de un Congreso Nacional con poderes constituyentes.

Al respecto, es conveniente enfatizar que, como lo señalaran dichas fuerzas políticas en su oportunidad, no hay salida democrática real para el país mientras Pinochet permanezca en el poder. Pinochet constituye el obstáculo principal que impide al país un pronto retorno a la democracia.

También es oportuno enfatizar el consenso que señala que el proceso de transición debe sustentarse en la más pronta, garantizada, libre y democrática expresión de la soberanía popular, que genere las autoridades del país y la nueva institucionalidad que debe regir la nación.

A fin de asegurar la mayor legitimidad y apoyo posible al gobierno que presida la transición, creemos de la mayor importancia que las fuerzas opositoras acuerden los contenidos programáticos democratizadores dentro de los cuales dicho gobierno deberá realizar su acción. Estos deben contemplar medidas respecto a las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial, derogación de la legislación represiva y aparatos de seguridad que el régimen se ha dado para su sustentación, liberación de todos los presos políticos y total esclarecimiento y justicia en torno a los atropellos a los derechos humanos, el término del exilio, entre otros. En general, las medidas democratizadoras deberán guardar una sólida coherencia con los pactos o acuerdos que enmarquen la futura construcción democrática.

Finalmente, creemos que es altamente trascendente para la defensa de la autodeterminación de Chile como país, que las fuerzas democráticas rechacemos tajantemente la intromisión extranjera en decisiones y procesos que sólo al pueblo de Chile corresponde hacer dirimir. La necesaria y valiosa solidaridad internacional con nuestra lucha democrática jamás podrá llegar a confundirse con la legitimación del intervencionismo extranjero en nuestros asuntos internos.

SOBRE LOS PACTOS O ACUERDOS SUSTENTADORES DE LA TRANSICION Y DEL FUTURO REGIMEN DEMOCRATICO.

Nos asiste la convicción de que algunos de los problemas institucionales, económico-sociales y de derechos humanos más delicados y graves que en el futuro democrático deberán enfrentarse tendrán que ser objeto de pactos o acuerdos específicos. Creemos que así tendrán mayores

posibilidades de ser resueltos positiva y constructivamente, dando fuerza, legitimidad y estabilidad a la futura democracia.

Entre tales pactos o acuerdos complementarios destacamos aquel mediante el cual las fuerzas opositoras pueden acordar el marco constitucional dentro del cual podrán moverse las propuestas específicas de cada fuerza política hará en el momento que el pueblo chileno soberanamente se pronuncie sobre las características y contenidos globales del régimen jurídico-institucional dentro del cual se construirá la futura democracia. Para tal propósito, reiteramos nuestra voluntad de suscribir los acuerdos alcanzados al 30 de octubre de 1984 entre las fuerzas de la Alianza Democrática y el Movimiento Democrático Popular, así como por la Izquierda Cristiana y el MAPU.

La promoción y defensa de los derechos humanos exige la investigación y esclarecimiento de los centenares de detenidos desaparecidos, de los ajusticiados y asesinados, de los torturados y demás casos de atropellos a los derechos fundamentales del hombre, así como también el juzgamiento mediante proceso justo y castigo de los que resulten culpables, sean ellos civiles o militares. Esto no sólo constituye un imperativo ético y de justicia, sino que es condición imprescindible para restaurar una sana convivencia social y política. De allí que será igualmente importante el pacto relativo a la promoción y defensa permanente de los derechos humanos en el país, de acuerdo con los Pactos Resoluciones Internacionales de Naciones Unidas existentes al respecto.

Especial consideración deberá prestarse a un pacto sobre la justicia social, que deberá ligarse íntima y coherentemente con los consensos que se logren para una reconstrucción económica y social del país que tenga como preocupación central la protección, defensa y promoción de los derechos e intereses de los sectores más postergados y explotado del país.

Respaldamos la iniciativa surgida en la Asamblea de la Civilidad de promover un pacto suscrito por las principales organizaciones sociales del país, que defina los lineamientos de una futura convivencia y establezca el compromiso de lucha conjuntamente por la más amplia participación popular en la democratización de las instituciones básicas del Estado y en la decisión, planificación, ejecución y control de la estrategia y planes de desarrollo del país.

Finalmente, nos parece de la mayor trascendencia para la profundidad y solidez de la democracia futura el desarrollo de pactos o acuerdos sobre dos áreas cruciales. Por un lado, debemos desarrollar una nueva Doctrina de la Defensa Nacional, claramente concordante con los principios y normas democráticas del futuro régimen, que sustituya la pretensión del rol tutelar sobre el sistema político que se le pretende asignar a las Fuerzas Armadas y que recoja los planteamientos sobre seguridad geoeconómica desarrollados por el General Carlos Prats y otros respetados uniformados. Por otro lado, se requerirá un pacto en torno a la necesidad insoslayable de renovar y democratizar profundamente al sistema y Poder Judicial, para hacerlo un efectivo garante y protector de los Derechos Humanos, un adiestrador eficaz de real justicia y un componente del Estado clara e indiscutiblemente comprometido con los principios democráticos y efectivamente independientes de quienes detentan el poder.

SOBRE LA NECESIDAD DE PROMOVER CAMBIOS PROFUNDOS EN EL MARCO DEL FUTURO REGIMEN DEMOCRATICO: HACIA UN PROYECTO POPULAR Y NACIONAL DE LA IZQUIERDA CHILENA.

Nuestro país, América Latina y el mundo han sufrido grandes transformaciones en las últimas décadas. Las soluciones y respuestas a los problemas y condiciones de los sesenta y setenta en la perspectiva de las sociedades del próximo milenio. Hoy, más que en el pasado, se ha ensanchado el campo y adquirido renovada fuerza y vigencia el proyecto socialista como solución más certera a los graves e insolubles problemas y crisis que acompañan a un sistema capitalista que demuestra cada día más claramente su agotamiento histórico. La dictadura chilena no es sino la expresión de un determinado momento del proceso de acumulación capitalista que, llevado a la exacerbación de un intento refundacional neoliberal, ha dejado al desnudo que este sistema no sólo es injusto y excluyente sino que, además, requiere de las más brutales formas de explotación y represión para asegurar su realización. Reafirmamos, por tanto, nuestra profunda vocación socialista, porque sólo en los marcos de tal proyecto es posible la solución de los problemas de las mayorías nacionales y al realización plena de una opción radical por la democracia. Ello nos compromete en una definida y legítima vocación de poder, puesto que aspiramos no sólo a ser promotores de nuestra utopía en una sociedad que haya ensanchado sus espacios de libertad sino a conquistar una mayoría por los cambios profundos en nuestra sociedad, enrumbados en la perspectiva de nuestro proyecto.

Estamos profundamente convencidos, además, que la efectiva viabilidad y fortaleza de nuestro futuro democrático están inseparablemente ligadas a la promoción de grandes y profundos cambios en el país, así como en el impulso decidido a la integración latinoamericana y una nueva forma de inserción en el concierto mundial en los marcos de un resuelto esfuerzo por modificar el orden económico internacional de manera sustantiva .

Creemos imprescindible e imperioso para ello la construcción de una fuerza social y política mayoritaria por los cambios, que fundan en un sólo proyecto los objetivos de justicia y libertad, democracia y socialismo. En tal perspectiva, las fuerzas democráticas, y muy especialmente aquellas que en el pasado hemos planteado la necesidad y hecho el esfuerzo por realizar reformas profundas o transformaciones estructurales del país, tenemos que hacer el esfuerzo histórico por concertar el impulso a cambios sustanciales en la economía y la sociedad chilenas. Cambios en que las grandes mayorías, y en primer término los trabajadores y los sectores populares y aquellos explotados y esquilados por los sectores minoritarios del gran capital y del monopolio, se sean auténticamente protagónicos tanto en la promoción de dichos cambios como en el justo y equitativo reparto de los beneficios del proceso productivo y social. Sólo de esa manera seremos capaces de construir una democracia radical, justa, solidaria y participativa, que otorgue verdadera sustancia y sentido al acto soberano y periódico del pueblo chileno de elegir entre hombres y proyectos de gobierno.

Este es el gran desafío histórico de la Izquierda chilena y de todos los sectores progresistas del país. Salvador Allende en su profunda convicción democrática y socialista y visionaria percepción del futuro, fue quien más cerca estuvo de conducir a la Izquierda por dicha senda, ensanchada en sus posibilidades por la significativa cercanía programática con la candidatura presidencial demócratacristiana de Radomiro Tomic de 1970.

Hoy recogiendo el ejemplo de Allende y alentados por los grandes cambios producidos en el país, que han acercado objetivamente los intereses transformadores de las grandes mayorías que se ven interpretadas por las posiciones de izquierda y las progresistas del centro, nos proponemos enfrentar el desafío histórico señalado. Tenemos clara conciencia de nuestras diferencias. Pero, también, confianza en la fuerza de los factores objetivos que alimentan tal perspectiva, así como una de-

cidida voluntad de superarlas y de llegar a los acuerdos que nos permitan realizar la empresa inconclusa.

La Izquierda chilena ha hecho contribuciones decisivas a la sustentación y profundización de la democracia en el Chile anterior a la dictadura. Hoy seguimos aspirando y luchando por la democracia. Pero no una democracia cualquiera, puesto que una que sólo logre restituir los contenidos formales de tal régimen mantendrá las raíces de la injusticia y la marginalidad de vastos sectores, conduciendo al mismo empantanamiento y dislocación social que ya precipitó antes su derrumbe por la contrarrevolución reaccionaria.

Hacemos una opción radical por la democracia, en que ésta no sea sólo vista como una forma de administración del orden social existente sino como un camino efectivo para convertir la democracia formal en de mocracia sustantiva, transformándola en una democracia social. Es decir, haciendo de la democracia no sólo un instrumento sino también una finalidad o meta, valiosa por si misma.

La democracia a la que aspira nuestro pueblo está hoy, más que nunca, indisolublemente ligada a la definitiva liberación de las grandes mayorías de los yugos de la cesantía estructural, del estancamiento económico y de la profundamente injusta distribución del excedente económico socialmente generado. Está insoslayablemente ligada, también al irrestricto respecto a los derechos humanos, al pleno restablecimiento de la soberanía popular y al poder del pueblo de autodeterminar su futuro, sin tuteladas ni intromisiones ilegítimas.

La democracia que aspiramos construir debe permitir a los chilenos organizarse social y políticamente sin exclusiones, discriminaciones, ni protecciones que esconden en temor al pueblo soberano; y permitirles también influir y participar en el aparato de Estado hasta convertirlos en instrumento efectivo de los intereses de las grandes mayorías. Debe permitir orientar la actividad productiva de los chilenos en función de la satisfacción de las necesidades básicas de la población y no de los requerimientos de un mercado en el que sólo los que tienen determinan todo. Debe permitir que el Estado, expresión efectiva de las mayorías, asuma el rol orientador, planificador y promotor del desarrollo que apunta más a mejorar la calidad de vida de las vastas mayorías que a mejorar indicadores macroeconómicos que esconden profundas desigualdades e injusticias. Debe permitir la erradicación de la concentración del poder económico y político del capital financiero y monopólico, haciendo posible la transferencia al poder público de la propiedad y gestión de aquellas áreas estratégicas o decisivas para la dirección y orientación de la economía nacional y de la

y de la seguridad geoeconómica del país. Debe permitir el desarrollo de una pluralidad de formas de propiedad -pública, cooperativa, mixta y privada- proporcionando estímulo y seguridad a todos aquellos agentes económicos cuya actividad apunta hacia la promoción del interés popular y nacional. Debe permitir que, dentro de la planificación estratégica de la economía, el mercado tenga un rol contralor de la eficacia del área pública e incentivador del interés privado que se ponga a servicio de las finalidades sociales de la producción. Debe permitir, asimismo, la transformación profunda de las Fuerzas Armadas y de Orden para que cumplan el rol profesional en un mundo que ha sufrido modificaciones trascendentales, y para que respeten efectivamente los principios democráticos y la soberanía popular, erradicando la posibilidad de su instrumentación por intereses minoritarios antidemocráticos o por el imperialismo. Debe permitir la democratización profunda del Poder Judicial, de los poderes locales y del conjunto del aparato del Estado. Debe permitir, en la medida que trascienda los límites de la formalidad, el desarrollo de nuevos valores sociales y culturales que desplacen progresivamente el individualismo egoísta y desarrollen la solidaridad y la cooperación, proyectando a todas las esferas de la vida nacional. Debe permitir la valoración creciente del rol del trabajador y del trabajo acumulado, del esfuerzo humano, como un capital social que, más que fuente de ganancias para unos pocos, esté destinado a garantizar una vida decente y plena para todos los chilenos. Aspiramos a una democracia, en fin, que no se fundamenta en la imposición por la coacción abierta o disimulada de los que mandan, sino que en el consenso de las grandes mayorías nacionales.

Estamos convencidos que una concepción democrática como la esbozada encuentra una amplia acogida en los más vastos y diversos sectores sociales y políticos del país, y en especial, entre las fuerzas de la Izquierda y de los sectores progresistas del Centro. De allí que creemos que existen condiciones que objetivamente hacen posible la construcción de una poderosa mayoría por los cambios profundos de nuestra sociedad, que permita una decisiva profundización de la democracia que juntos construyamos.

Estamos convencidos de que ya es hora de superar las heridas del pasado, los temores del presente y las incertidumbres del futuro. Lo principal es terminar con la dictadura y abrir camino a la democracia. Podemos hacerlos si nos concertamos, poniendo por sobre todo los intereses de las vastas mayorías que juntos representamos y conducimos, po-

niendo antes que nada el interés nacional. Para ello tenemos que saber superar nuestros mutuos enclaustramientos del presente y proyectarnos al ancho cauce de las vastas posibilidades para el progreso y la justicia social que nos deparan los sorprendentes avances con que la Humanidad enfrenta los umbrales del próximo milenio.

PARTIDO MAPU OBRERO CAMPESINO
MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE (Histórico)
IZQUIERDA CRISTIANA
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE (S. Gral. C. Almeyda)
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE (Unitario)
MOVIMIENTO DE ACCION POPULAR UNITARIA (MAPU)

Santiago de Chile, Diciembre de 1986.-